



Atribución-NoComercial 2.5 Colombia (CC BY-NC 2.5)

La presente obra está bajo una licencia:
Atribución-NoComercial 2.5 Colombia (CC BY-NC 2.5)
Para leer el texto completo de la licencia, visita:
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/co/>

Usted es libre de:



Compartir - copiar, distribuir, ejecutar y comunicar públicamente la obra
hacer obras derivadas

Bajo las condiciones siguientes:



Atribución — Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciante (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o que apoyan el uso que hace de su obra).



No Comercial — No puede utilizar esta obra para fines comerciales.

El reconocimiento de la sociedad moderna como un mundo plural en donde no existe un perfil de pensamiento si no una confluencia de fragmentos socio culturales¹

Eyer Inelda Suarez Vela²

Universidad Católica de Colombia

Resumen:

El presente artículo busca establecer la importancia y reconocimiento de la diversidad de grupos étnicos que hay en Colombia, estableciendo su evolución jurídica y legal durante los años 2010 a 2015, debido a que estos grupos son especialmente vulnerables por causa del conflicto armado que ha existido en el país durante las últimas cinco décadas y el drama del narcotráfico que afecta los territorios que son habitados por dichas comunidades, dicho problema ha generado desplazamientos masivos de la población indígena y destrucción de sus raíces nativas y cultura ancestral, motivo por el cual, se debe realizar un análisis generalizado de todos los pronunciamientos establecidos por la Corte Constitucional, así como las normas expedidas, con el fin de establecer permitan establecer si dichos pronunciamientos se ajustan a la realidad jurídica en la que se encuentran los grupos étnicos, debido a que no existe plena certeza de la eficacia de que estos pronunciamientos jurídicos establecidos en la norma que se encarguen de proteger y garantizar los derechos que tienen dichas comunidades en Colombia.

Palabras Clave: Grupos étnicos, etnias, Colombia, jurisprudencia, Corte Constitucional, legislación, evolución,

¹ Artículo de Reflexión elaborado como Trabajo de Grado, bajo la Dirección del Doctor. Oscar Agudelo, Docente de la Universidad Católica de Colombia. Facultad de Derecho. Bogotá D.C. 2018.

² Suarez Vera, Eyer Inelda. Optante al Título de Abogada, terminación de materias Diciembre 2017. E-mail. eisuares85@ucatolica.edu.co

Abstract:

This article seeks to establish the importance and recognition of the diversity of ethnic groups that exist in Colombia, establishing their legal and legal evolution during the years 2010 to 2015, because these groups are especially vulnerable because of the armed conflict that has existed in Colombia. the country during the last five decades and the drug trafficking drama that affects the territories that are inhabited by these communities, this problem has generated massive displacements of the indigenous population and destruction of their native roots and ancestral culture, which is why, it must be carry out a generalized analysis of all the pronouncements established by the Constitutional Court and other legislations created by the congress of the republic that allow to establish if said pronouncements are adjusted to the legal reality in which said ethnic groups are, because there is no full certainty of the effectiveness of said pronouncements legal frameworks established in the norm that are in charge of protecting and guaranteeing the rights that these communities have in Colombia.

Key words:

Ethnic groups, ethnic groups, Colombia, jurisprudence, Constitutional Court, legislation, evolution,

Sumario

Introducción. 1. Etnias en Colombia. 1.1 Comunidades indígenas. 1.2. Comunidades Afrocolombianas. 2 Legislación respecto a la protección étnica en Colombia. 3. Análisis generalizado de la situación de los grupos étnicos en Colombia. Conclusiones. Referencias.

Introducción

Los Estados, tienen la necesidad de reconocer y acoger la existencia de comunidades tradicionales diversas, ya que desde este punto pueden garantizar el bienestar de todos los miembros. Así entonces, si se busca una protección real a la diversidad étnica y cultural el Estado debe tener claridad de la existencia de la existencia y ubicación de estos, así podrá identificar sus necesidades y velar por sus derechos (Ortiz, 2013).

Respecto de lo anterior, la Constitución Política de 1991 en su artículo 7 establece que:

El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana, el estado debe reconocer y proteger la diversidad étnica y cultural, señalando que es su obligación y la de todas las personas que habitan el territorio nacional, proteger las riquezas naturales y culturales de la nación. El gobierno debe adoptar medidas acordes con las tradiciones y culturas de los pueblos indígenas y tribales con el fin de darles a conocer sus derechos y obligaciones. Para tal efecto debe recurrir, si fuere necesario, a traducciones escritas y a la utilización de medios de comunicación de masas en las lenguas de dichos pueblos (Rodríguez, 2014, p 2.).

Según la teoría “*Multination State*”, desarrollada por el filósofo político canadiense Will Kymlicka, las características de las minorías raciales se desarrollan porque son culturas que han sido integradas a otra cultura mayoritaria, pero en ningún momento la cultura sometida tiene el mismo Gobierno de la cultura mayoritaria, sino que, al contrario, aquella poseía su propio autogobierno antes de su integración (Guerrero & Rubio, 2015).

Existen dos formas para constituir Estados multinacionales: una es ser conquistado e integrado a una cultura mayoritaria, y la otra es un acuerdo de constituirse en un Estado federado:

Por tanto, un estado es multicultural bien si sus miembros pertenecen a naciones diferentes (un Estado Multinacional), bien si éstos han emigrado de diversas naciones (un Estado Poliétnico), siempre y cuando ello suponga un aspecto importante de la identidad personal y la vida política” (Martínez & Noguera, 2017).

Karl Raimund Popper teorizó en su trabajo el concepto de la sociedad abierta y sus enemigos, en el que el primer enemigo resulta ser Platón, basta con establecer que la sociedad abierta es en esencia la sociedad libre tal como la entiende el liberalismo, es por tal razón, que la búsqueda por la igualdad, las libertades políticas y el uso de la razón son parte fundamental de una sociedad abierta y se obtiene gracias a la "transparencia" racional con la que el conocimiento común se obtiene, se elabora y se transmite dando acceso general y libre a cualquier persona sin importar su raza, condición y género (Sartori, 2001 p.14).

Como lo indican Echeverri & Díaz (2016) el presidente de la República, como jefe de la Rama Ejecutiva y autoridad superior ante todas las instituciones legítimamente constituidas y bajo su responsabilidad, tiene la obligación de velar por el cumplimiento de los derechos constitucionales de cada uno de los habitantes del territorio colombiano. Es por esta razón, que es importante diseñar, señalar y difundir las acciones gubernamentales que incluyan objetivos de interés público, dirigidas a satisfacer bienes y servicios enfocados a la protección de derechos y principios fundamentales, basadas en diagnósticos y estudios con participación de la sociedad.

Para nadie es un secreto que tanto los indígenas como los afro descendientes, son grupos que constantemente sufren el flagelo del narcotráfico derivado de los enfrentamientos de grupos al margen de la ley donde se disputan territorios estratégicos para el cultivo, fabricación, transporte de estupefacientes: Atrapados en una zona difícil están los miembros de la comunidad Nasa, en las montañas del norte del departamento del Cauca, desde que se propusieron hacer cumplir la Resolución 002 de febrero de 2009 del Cabildo de Jambaló, que equivale a una ley de obligatorio cumplimiento en el sistema político indígena. En caso de que lo provisto por la resolución no se cumpla, la ley indígena ordena que los Nasakiwe Tengas (Guardias Indígenas) ubiquen a actores armados, armas y laboratorios (Herrán, 2009).

De todo esto podemos inferir que existen varias legislaciones que abarcan todas las temáticas mencionadas anteriormente en el texto, no obstante, es necesario profundizar, en una investigación jurisprudencial de todas las sentencias proferidas por las altas cortes del país, en donde se toma como punto de partida las legislaciones que se relacionan con diversidad cultural y demás temas relacionados, de todo esto podremos identificar cuáles han sido los precedentes jurisprudenciales que han resaltado en esta investigación para identificar cuáles han sido los cambios originados por dichas normas permitiendo realizar un análisis crítico y comparativo bajo los parámetros establecidos en la racionalidad comunicativa.

De los argumentos que preceden, se ha planteado la pregunta de investigación que es la siguiente, ¿Cuál es el reconocimiento legal y jurídico que promueve el Estado colombiano frente a la situación de los grupos étnicos en Colombia a partir de lo expresado por la Corte

Constitucional en relación al principio constitucional del respeto a la diversidad étnica y cultural?.

Para la realización de dicho artículo se utilizó una metodología doctrinal y jurisprudencial hermenéutica a partir de la recopilación de fuentes primarias como revistas indexadas y estudios (Agudelo, 2018).

1. Etnias en Colombia.

Antes de desarrollar el tema inicialmente planteado, debemos precisar cuál es la definición de etnia, debido a que dicho concepto es indispensable para el desarrollo del texto, la definición de etnia proviene de un vocablo griego que significa pueblo o nación, a su vez, es considerada como una comunidad humana que comparte una afinidad cultural que se identifica a sí misma y que es identificada dentro de un Estado basándose en su identidad, en el idioma o dialecto que es utilizado por cada uno de sus miembros, en la religión en la que se encuentran ubicados (Ossorio, 2010 . p. 123), prácticas culturales y ancestrales que apoyan sus tribus o grupos sujetándose en los demás comportamientos sociales que son similares en nuestra sociedad actual.

En América Latina, en las últimas décadas, se han renovado y profundizado los debates académicos y políticos acerca de los problemas derivados de la “racialización” de poblaciones que, como los descendientes de africanos esclavizados traídos a este continente por los europeos desde el siglo XV, representan numérica, histórica y culturalmente, parte significativa y constitutiva de la sociedad colombiana. (Lamus Canavate, 2012) Ya que hacen parte esencial de la evolución histórica del país debido a la gran riqueza poblacional con la que cuenta el país, debido a su gran diversidad poblacional. *“En el actual contexto de intereses mundiales, cada vez más fluidos e integrados, se da una intensa relación entre personas de las más diversas realidades cívicas, económicas, religiosas, culturales y étnicas”* (Goddard, 2001 p. 12)

La nación colombiana es hoy en día producto del más variado mestizaje, donde interactúan la cultura y las tradiciones de los pueblos americanos, europeos y africanos; esta situación de diversidad la hace privilegiada respecto de los demás países del mundo. En ese contexto, se diferencian de la sociedad occidental cuatro sectores étnicos: los pueblos indígenas, las poblaciones afrocolombianas, incluidas las comunidades raizales de San

Andrés y Providencia y la comunidad de San Basilio de Palenque, en el departamento de Bolívar y el pueblo ROM o gitano (DANE, 2007).

Colombia actualmente es reconocido como un país con una gran diversidad pluricultural y multilingüe, debido a la existencia de sus 87 etnias indígenas junto con personas pertenecientes a los otavaleños³ y a otros pueblos indígenas de Ecuador, Bolivia, Brasil, Guatemala, México, Perú y Venezuela., no obstante, también existen 3 grupos diferenciados de población afrocolombiana y el pueblo ROM o gitano; ya que se hablan 64 lenguas amerindias como lo son: el bandé, lengua de los raizales del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el palenquero, lengua criolla de las comunidades de San Basilio de Palenque,- primer pueblo libre de América, declarado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como obra maestra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad - y el Romaní o Romanés lengua ROM (DANE, 2005).

Con la promulgación de la Constitución Política de 1991, se han establecido diferentes vías de análisis en torno a viabilizar las condiciones materiales, jurídicas y morales que permitan la realización de la nueva función de estatus atribuida a las identidades colectivas a través del hecho institucional y del reconocimiento de la pluralidad cultural en Colombia.

Tales interpretaciones advierten que el carácter de complejidad de ese problema admite el concurso de otros saberes como, por ejemplo, el filosófico político, se han sugerido líneas de interpretación que concuerdan en otorgarle derechos y poderes especiales a las minorías culturales como condición para afianzar un ordenamiento sociopolítico democrático e incluyente, dicha inclusión garantiza la igualdad formal y material de todos los individuos que habitan en el territorio nacional (Cuchumbe, 2012. p.17)

El proceso de reconocimiento de los grupos étnicos se inició en la década del 70 del siglo pasado, cuando las organizaciones indígenas con el apoyo de diversos sectores de la sociedad iniciaron un proceso de reafirmación y conciencia de su identidad que dio como fruto que la multiculturalidad del país fuera reconocida en la Constitución Política de 1991 (Stavenhagen, 2002) la cual tiene cerca de 30 artículos referidos a los grupos étnicos, a sus

³ Pueblo indígena del Ecuador que por su presencia significativa en Colombia se le asignó un código de etnia.

diversas y particulares culturas entre los que se destacan: “El Estado colombiano reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación Colombiana” (Art. 7 C.P.). “... las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. La enseñanza que se imparte en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe” (Art. 10 C.P.). “Las tierras de resguardo... son inalienables, imprescriptibles e inembargables” (Art. 63 C.P.). “... tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural...” (Art. 68 C.P.). “Son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas” (Art. 286 C.P.). (DANE, 2005).

La Corte Constitucional ha indicado lo siguiente, respecto de la protección de los grupos étnicos:

Conscientes de la contribución de las comunidades étnicas al pluralismo de la sociedad, del respeto que merecen estas comunidades por sus tradiciones y creencias, de la necesidad de respetar, reconocer y preservar su cultura e identidad, los estados han adoptado normas internacionales de carácter general que favorecen la protección e integración de estas poblaciones. Igualmente, se ha procurado la protección del territorio que los pueblos aborígenes habitan, en consideración al papel fundamental que aquel juega tanto para su permanencia y supervivencia, como para su desarrollo político, económico y social, de acuerdo con su cosmovisión y tradiciones (Corte Constitucional, Sentencia T-379 de 2014).

Es necesario resaltar que los pueblos indígenas tienen derecho a la distintividad, que se define por Manrique (2005) como el derecho al reconocimiento de su existencia por parte de otras sociedades, y de todos los miembros que integran dicha sociedad. El Derecho a la distintividad entonces se basa en el reconocimiento de su existencia.

1.1 Comunidades Indígenas.

Con una población total, según lo establecido por el Departamento Nacional de Planeación (2017), de 701.866 habitantes en cinco macro regiones identificadas como: Amazonía, con 83 entidades territoriales (resguardos y reservas), 44 grupos étnicos y una población de 48.622, equivalente al 6.9%; Orinoquia, con 124 entes territoriales, 56 grupos étnicos y 69.866 habitantes que representan el 9.9% de la población indígena nacional, en la que se destacan los sicuani, con el 29.4%, los curripacos, con el 10.1% y los tukano, con el 9.7% de la región.

Se puede decir que la región amazónica cuenta con una gran extensión de terrenos en comparación con otras regiones del país, motivo por el cual dichas comunidades tienen cierto beneficio, ya que ellos tienen acceso a una gran cantidad de recursos naturales que otras comunidades no tienen, además cabe adicionar que dichas comunidades al ubicarse en dichas zonas tienen acceso a una gran variedad de recursos que les permiten tener una mejor calidad de vida.

La región Centro Oriente, con 28 resguardos, entre los que se desatacan los pijao, con el 9%, los uva, con el 19% de una población de 36.017 habitantes de la región, equivalente al 5.1 % de la población indígena nacional. La región de Occidente con 222 resguardos, 27 pueblos indígenas y 337.636 habitantes, lo que representa la mayor población del país (48.1%), destacándose el pueblo nasa o paez, con el 35.1% de la población indígena de la región, los embera, con 1.1% de la región, los pastos, con el 16.4% y los guambianos, con el 6.1%. La Costa Atlántica cuenta con 22 entes territoriales, 17 grupos étnicos y 209.719 habitantes que representan el 29.4% de la población de la región. El grupo mayoritario de la región es el wayuu, con el 68.6% de la región, le siguen los zenú, con el 16.1% y los arahuacos, con el 6.8% (Aaron, Solano, Choles & Cuesta 2018, p.4).

De igual forma, se establece otra categoría en relación con la disposición de las poblaciones étnicas por su grado de dispersión. En las comunidades del Vichada se encuentran resguardos como el de Predio Putumayo (Resolución Junta de Resguardo de INCORA 11/09/1985 Resolución de ampliación INCORA 06/04/1988.), territorio que agrupa más de 30 etnias indígenas diferentes, en un territorio de 3 millones de hectáreas (Ferreira, 2015, p.20).

Como lo indica la Agencia Nacional de Tierras (2018):

Del total de pueblos indígenas que habitan el territorio colombiano, un 85% viven en tierras de resguardos legalmente constituidos, mientras que 200.000 indígenas, aproximadamente, no tienen tierra y se encuentran fuera de sus territorios ancestrales. Sí bien es cierto que los pueblos indígenas poseen el 28% del territorio nacional, su ubicación, calidad, posibilidades de producción y comercialización no son favorables ni suficientes para obtener los recursos necesarios que les permitan una subsistencia digna y acorde con sus características propias y que les posibilite una sustentabilidad, además los constantes combates entre los grupos subversivos y los miembros de la fuerza pública causan una gran cantidad de

desplazamientos masivos causando que el territorio donde habitan dichas comunidades se vea seriamente comprometido (p.5).

Tabla 1. División etnográfica indígena en el Censo 2005 realizado por el DANE

Región etnográfica	Grupos étnicos en los territorios
Región Norte	Wáwú, arhuaco, wiwa, kogui, kankuamo, chimilas, yukos, zenú
Región Noroccidental	Zenú, embera katio, embera chami, embera waunan, tule, kuna, eperara siapirara.
Región Centronoriental	U'wa, motilón bari, quahibo, sicuani, piapoco, cuiba y macahuan.
Región Suroccidental	Waunan, paez, guambianos yanaconas, awa, pastos, ingas, quillacinga, kam'iza, siona, kofan, eperara siapirara, embera.
Región Centroccidental	Embera Chami, Pijao.
Región Oriental	Sikuani, piapoco, piaroa, salivas, curripaco, puinave, guayabero, tucano, desano, kubo, miriti - paraná - matapi, yukuna, tikuna, coreguaje, muinane, tanimuca, cocama, witoto, inga, paez, andoque, cuiba, saliva, nukak makú.

Fuente: Documento de trabajo. Metodología Censo en Territorios Étnicos DANE 2005

1.2 Comunidades Afrocolombianas.

La población afrocolombiana está compuesta por una amplia diversidad de sujetos, entre ellos hombres y mujeres que tienen rasgos marcados lingüísticos, étnicos y culturales africana, dicha población incluye una gran diversidad cultural y regional, de acuerdo a las zonas donde se encuentran establecidos geográficamente (Ministerio de Cultura, 2008).

La población Afrocolombiana hoy se encuentra distribuida en todo el territorio nacional, sin embargo, existen regiones con mayor presencia debido a procesos históricos y demográficos, entre las cuales están la región del Pacífico, el valle del Patía, el norte del departamento del Cauca y el sur del Valle, y la franja costera del Caribe; y hoy se observa un fenómeno creciente de poblamiento en la Orinoquía y el piedemonte de la Amazonía (Vergel, 2015, p 34.)

Dentro de la población negra o afrocolombiana se pueden diferenciar cuatro grupos importantes: los que se ubican en el corredor del pacífico colombiano, se caracterizan por que tienen prácticas culturales propias de los pueblos descendientes de africanos entre las que se

destacan la música, las celebraciones religiosas y la comida; el cultivo de la tierra tiene raíces fundamentalmente campesinas. En esta región se encuentran los 132 Territorios Colectivos de Comunidades Negras titulados hasta el día de hoy, los cuales ocupan un territorio de 4.717.269 hectáreas que corresponde al 4,13% de las tierras del país (Rojas & Valencia, 2011).

Los raizales del Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina, tienen raíces culturales afro-anglo-antillanas, cuyos integrantes mantienen una fuerte identidad caribeña, con rasgos socioculturales y lingüísticos claramente diferenciados del resto de la población afrocolombiana. Utilizan el bandé, como lengua propia y como religión originaria la protestante (Guzmán, 2008). La comunidad de San Basilio de Palenque, en el municipio de Mahates del departamento de Bolívar, pueblo que alcanzó su libertad en 1603, constituyéndose en el primer pueblo libre de América, allí se habla la otra lengua criolla afrocolombiana: el palenquero. Este pueblo ha logrado existir, en parte, gracias al relativo aislamiento en que ha vivido hasta hace poco.

Respecto de la multiculturalidad Ortiz (2013) expresa lo siguiente:

La diversidad cultural es un hecho evidente y, del mismo modo, creciente, por lo cual compromete al Estado a establecer garantías de los derechos humanos en términos de reconocimiento y de acceso a la justicia en condiciones de igualdad. Es aquí donde la reflexión teórica y el desarrollo jurídico de la protección de los derechos humanos cobran vida desde perspectivas multiculturales y pluralistas. En perspectiva multicultural, la diversidad cultural como reconocimiento de una identidad diferenciada en el campo jurídico, desemboca en la aceptación y el reconocimiento de la diversidad, lo cual no implica solamente saber que existen múltiples colores de piel, sino también diversas concepciones morales que varían de una cultura a otra, por lo que merecen ser tomadas en igual consideración al momento de garantizar sus derechos (p.4).

Así mismo, en la Constitución Política de Colombia de 1991 se reconoció a las comunidades afrocolombianas como pueblo- con un conjunto de derechos colectivos- que forma parte de la diversidad étnica y cultural de la Nación, por primera vez reconocida constitucionalmente. Este concepto de comunidad negra lo abordó la Corte Constitucional en la Sentencia T - 422 de 1996, en la cual determinó que una comunidad negra existe

independientemente de una base territorial urbana o rural determinada. (Ministerio de Cultura de Colombia, 2008)

2. Legislación respecto a la protección étnica en Colombia.

El derecho estatal es internamente heterogéneo ya que este combina dimensiones despóticamente represivas con dimensiones democráticas de gran intensidad, componentes altamente formales y burocráticos con componentes informales y desburocratizados, áreas de gran penetración estatal con áreas de casi completa ausencia del Estado. Según Llano (2016) Colombia es uno de los países en los que el derecho estatal compite fuertemente con ordenamientos paralelos.

Según lo establecido en la sentencia C-063 del año 2010, los derechos de los grupos indígenas son limitados en los casos donde los sistemas pluriculturales han puesto de presente la protección de los derechos fundamentales de las demás personas que habitan el territorio nacional, ya que deben tener un espacio garantizado que resulte armónico con los demás elementos integrantes del sistema, por tal motivo, no se exige al Estado de su deber de preservar la convivencia pacífica (Sierra, 2017 p.28), motivo por el cual está obligado a garantizar los derechos de todas las personas en su calidad de ciudadanas reconociendo las diferencias y demás necesidades particulares que surgen de la pertenencia de esas personas a grupos culturales específicos.

Taxativamente, la Corte se refirió en los siguientes términos a la diversidad étnica y cultural:

La diversidad étnica y cultural se manifiesta en posibilidades de expresión, mantenimiento e, incluso, profundización de las manifestaciones culturales que contribuyen a la definición de las etnias presentes en el territorio de nuestro Estado. Por eso resultan de vital importancia para su concreción elementos como la educación, las garantías para el uso de su lengua, sus manifestaciones religiosas y, en general, todas aquellas tradiciones que los identifican de la sociedad mayoritaria. En esa medida son estos elementos los que deben protegerse en cuanto actuación de un principio fundamental del Estado que aspira construirse a partir de los parámetros trazados por la Constitución (Corte Constitucional, Sentencia C-063 de 2010).

La Corte determinó que se presenta un desconocimiento del principio de diversidad étnica y cultural, ya que el literal acusado no tiene en cuenta las especificidades del sistema de protección en salud previsto para las comunidades indígenas, la cual, brinda posibilidades de acceso a servicios acordes con su cultura, en cuanto responden a la cosmovisión, a la vinculación comunitaria y no individual, al cuadro epidemiológico que las afecta, el proceso de diagnóstico que utilizan, los procedimientos curativos y los medicamentos empleados en dichos procesos. “Por esta razón, aunque la diversidad étnica y cultural implique apertura y pluralidad, no debe entenderse como la base legitimadora de un relativismo jurídico, que niegue sentido a los principios y derechos fundamentales previstos en la Carta. La diversidad protegida por la Constitución es aquella incapaz de anular los elementos básicos sobre los cuales está construido el Estado colombiano (Corte Constitucional Sentencia C - 063 de 2010).

Por tal razón, el gobierno para garantizar el respeto de los derechos fundamentales de las comunidades indígenas y demás grupos étnicos, optó por establecer la consulta previa en cuanto concreción de los principios de pluralismo, diversidad cultural y mecanismo de reafirmación identitaria, innato a un grupo cultural dentro de una sociedad, en el cual se dependa de su intervención en las decisiones en que se vean afectados directamente. Su indebida realización o su absoluta omisión traerán consecuencias constitucionales y, sobre todo, iusfundamentales⁴ dentro del proceso de determinación de la política pública estatal o de la toma de decisión por parte de la administración, por cuanto se estaría dejando de lado la concreción de principios fundamentales en el actuar de un Estado fundado en la toma de decisiones mediante procedimientos democráticos que, por tanto, posibiliten una participación que garantice la inclusión de los distintos grupos culturales que integran la sociedad, honrando de esta forma el principio de diversidad cultural para adoptar el reconocimiento, la promoción y la garantía de la identidad cultural como eje central de un Estado social y democrático, lo que se manifestó no sólo en instrumentos normativos nacionales, sino también internacionales de esencia pluralista e inclusiva (Corte Constitucional, Sentencia C - 063 de 2010).

⁴ En este sentido las libertades iusfundamentales son libertades protegidas (p. 226). Por lo que se refiere a competencias, éstas pueden ser designadas con expresiones como "autorización", "facultad" o "capacidad jurídica", entre otros términos (p. 227). 13 dic. 2017

Una cultura pluralista es tanto más genuina cuanto más se afianza en sus antecedentes históricos y, por tanto, en el principio de la tolerancia que la variedad y no la uniformidad, el discrepar y no la unanimidad, el cambiar y no el inmovilismo, sean "cosas buenas" (Sartori, 2001 p. 33.)

Con la sentencia T-236 del año 2012 se resalta el derecho constitucional fundamental al reconocimiento y debida protección de la diversidad étnica y cultural de los pueblos indígenas que se proyecta en dos dimensiones: una colectiva, que se refiere a la comunidad indígena como sujeto de derecho y otra individual que hace mención a cada miembro perteneciente a dicha comunidad resulta claro que las posibilidades de regular tanto las comunidades como a sus miembros individualmente, de acuerdo a criterios normativos propios derivados de sus costumbres y demás parámetros, se presenta como una opción claramente protegida por las normas nacionales legales y constitucionales, así como por la jurisprudencia y las normas internacionales al respecto aprobadas por Colombia, por tal motivo, se reconoce que la jurisdicción indígena debe conocer de todos los casos en concreto en donde se vea inmiscuida la actuación de alguno de sus miembros, la capacidad de Autogobierno a los pueblos indígenas (territorio, normas y autoridades propias), implica siempre la convivencia de esta capacidad junto con las normas y autoridades nacionales, razón por la cual, la justicia ordinaria debe colaborar armónicamente con la jurisdicción especial (Corte Constitucional, Sentencia T – 236 de 2012).

Las comunidades indígenas no sólo tienen autonomía administrativa, presupuestal y financiera dentro de sus territorios sino también autonomía política y jurídica. Esa autonomía jurídica se ejerce de acuerdo a los usos y costumbres de la comunidad indígena siempre que no vulnere la Constitución ni la ley. Dicha autonomía jurídica, se ampara en que según del artículo 246 Superior las autoridades de los pueblos indígenas pueden ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la república (Corte Constitucional, Sentencia T – 236 de 2012).

Los límites a la autonomía indígena, mencionados en la sentencia C 463 del año 2014, establecen los criterios generales de interpretación, en conflictos constitucionales que involucran la autonomía jurisdiccional indígena, que se apoyan en el principio de

“maximización de la autonomía de las comunidades indígenas” (o bien, de “minimización de las restricciones a su autonomía), establecen que solo se aplica dicho principio para salvaguardar un interés de mayor importancia o por el contrario dichas restricciones sean menos graves frente a otro tipo de alternativa, dicha valoración debe tener en cuenta las particularidades de cada grupo en concreto.

Se deben respetar el principio de “mayor autonomía para la decisión de conflictos internos”, toda vez que solo se deben ver involucrados de una comunidad, en caso de que exista un conflicto entre dos culturas distinta “deben armonizarse principios esenciales de cada una de las culturas en tensión, como lo ha explicado la Corte en su Sentencia T-496 de 1996).

También es necesario que se garantice el principio para la a mayor conservación de la identidad cultural, mayor autonomía” ya que han sufrido una mayor o menor destrucción de su cultura por efecto del sometimiento al orden colonial y posterior integración a la "vida civilizada" (Ley 89 de 1890).

De acuerdo a las disposiciones establecidas en la sentencia T – 425 del año 2014, se resalta la protección que debe el Estado a la identidad e integridad étnica, cultural, social económica de los pueblos indígenas el Estado debe proteger la integridad social, cultural y económica de tales comunidades, interés que ha sido definido como un derecho fundamental de aquéllas, por estar ligado a su subsistencia como grupo humano y como cultura (Parra & Rodríguez, 2005).

El Estado debe promover la elaboración de políticas culturalmente específicas dentro de los centros urbanos y demás zonas, en materia de atención de la salud, vivienda, educación y empleo, con el objeto de asegurar que los pueblos indígenas disfruten por igual de los progresos alcanzados este sentido, “los pueblos indígenas no deben considerarse divididos entre el medio urbano y el medio rural sino más bien como pueblos con derechos y una identidad cultural común, en proceso de adaptación a circunstancias y entornos cambiantes (Corte Constitucional, Sentencia T - 425 de 2014).

3. Análisis generalizado de la situación de los grupos étnicos en Colombia.

El Estado debe mostrarse de acuerdo y proteger la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana, el estado debe reconocer y resguardar la diversidad étnica y cultural, señalando que es su obligación y la de todas las personas que habitan el territorio nacional, proteger las riquezas naturales y culturales de la nación.

El gobierno debe adoptar medidas acordes con las tradiciones y culturas de los pueblos indígenas y tribales con el fin de darles a conocer sus derechos y obligaciones. Ya que se debe garantizar la igualdad formal y material que menciona la ley garantizando la política del estado social de derecho. Para tal efecto debe recurrir, si fuere necesario, a traducciones escritas y a la utilización de medios de comunicación de masas en las lenguas de dichos pueblos. (Rodríguez, 2014).

Actualmente, las etnias del país luchan para que sus derechos se respeten y puedan hacer venerar sus tradiciones para sus futuras generaciones, toda vez que la constante evolución y expansión de las ciudades sumado al crecimiento de la población en todo el país se han encargado modificar el entorno en que se encuentran dichas comunidades, por tal motivo, el gobierno nacional en harás de resguardar su diversidad étnica y cultural ha promovido varias legislaciones que se encarguen de proteger los derechos fundamentales que tienen las etnias en Colombia.

Los graves desfalcos económicos y demás temas relacionados con la corrupción han causado estragos directos a dichas comunidades, además estas tienen problemas sociales, culturales, educativas, políticas que causan una gran brecha en la sociedad colombiana unidas a los desequilibrios, inseguridades e injusticias propios del modelo de desarrollo económico y social capitalista promovido por las élites dominantes del país, sus víctimas siguen siendo las poblaciones más vulnerables (Caicedo & Castillo, 2013).

Para nadie es un secreto que tanto los indígenas como los afrodescendientes, son grupos que constantemente sufren el flagelo del narcotráfico que conlleva el enfrentamiento de grupos al margen de la ley donde se disputan territorios estratégicos para el cultivo, fabricación, transporte de estupefacientes (Cabrera, 2011), un claro ejemplo de esta

situación es la comunidad Nasa quienes se encuentran atrapados en una tenaza de plomo, en las montañas del norte del departamento del Cauca.

No obstante, con la implementación de los acuerdos de paz realizados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno nacional, se han creado una serie de herramientas que se encargan de promover la reparación de dichas comunidades que se han visto afectadas por los conflictos armados durante los últimos cincuenta años.

Conclusiones

De todo lo mencionado anteriormente podemos decir que el reconocimiento legal y jurídico que tienen los grupos étnicos en Colombia a partir de lo expresado por la Corte Constitucional durante los años 2010 hasta 2015 no se encuentra debidamente desarrollado a las necesidades actuales de dicha población afectada, toda vez que cada día surgen nuevas problemáticas que afectan a las comunidades indígenas y afrocolombianas, las cuales no tienen un completo amparo de sus derechos adquiridos, tan solo, dicha información se encuentra sujeta en la constitución política de Colombia con base en el artículo 7, ya que el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana, resaltando la obligación de todas las personas que habitan el territorio nacional, proteger las riquezas naturales y culturales de la nación.

No obstante la corte constitucional ha resaltado que se debe respetar la autonomía de los pueblos indígenas, es por esta razón que se reconoce como una jurisdicción especial en la cual se toman sus decisiones de una forma independiente, también el estado colombiano al garantizar el reconocimiento de los derechos fundamentales a toda la población que habite el territorio nacional, el estado debe promover la consulta popular al momento de realizar alguna acción determinada en la cual se vea afectada un grupo étnico determinado.

Por otro lado, grupos afrodescendientes deben tener derecho a contar con una calidad de vida digna en la cual se vean respetados sus derechos fundamentales, es por esta razón que la constitución política mediante la aplicación de su artículo 13 establece una igualdad jurídica y formal ante la ley garantizando una sana convivencia pacífica resaltando estado social y democrático de derecho en el que nos encontramos.

Referencias

- Agencia Nacional de Tierras. (2018). Implementación del programa de legalización de tierras y fomento al desarrollo rural para comunidades indígenas a nivel nacional. Bogotá: Imprenta Nacional. Recuperado de <http://www.agenciadetierras.gov.co/wp-content/uploads/2018/03/BPIN-PROYECTO-IMPLEMENTACION-DEL-PROGRAMA-DE-LEGALIZACION-DE-TIERRAS-Y-FOMENTO-AL-DESARROLLO-RURAL-PARA-COMUNIDADES-INDIGENAS-A-NIVEL-NACIONAL.pdf>
- Agudelo, Ó. A. (2018). Los calificativos del derecho en las formas de investigación jurídica. En Ó. A. Agudelo-Giraldo, J. E. León Molina, M. A. Prieto Salas, A. Alarcón-Peña & J. C. Jiménez-Triana. La pregunta por el método: derecho y metodología de la investigación (pp. 17-44). Bogotá: Universidad Católica de Colombia.
- Cabrera, L. A. (2011). Efectos jurídicos del conflicto de competencia entre la jurisdicción ordinaria penal y la jurisdicción indígena Un estudio en el resguardo de Huellas-Norte del Cauca. *Justicia Juris*, 7(2), 93-106. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4122190>
- Caicedo, J. A., & Castillo, E. (2008). Indígenas y afrodescendientes en la universidad colombiana: Nuevos sujetos, viejas estructuras. *Cuadernos interculturales*, 6(10). Recuperado de <https://www.redalyc.org/html/552/55261005/>
- Cuchumbe, N. (2012). Apertura constitucional de 1991, diversidad étnica y cultural y ordenamiento político: aproximación filosófica política. *Universitas Humanística*, 74. Recuperado de <http://www.scielo.org.co/pdf/unih/n74/n74a04.pdf>
- DANE. (2007). Colombia una Nación Multicultural. Informe. Bogotá: Colombia. Imprenta Nacional. Recuperado de https://www.dane.gov.co/files/censo2005/etnia/sys/colombia_nacion.pdf

- Departamento Nacional de Planeación. (2017). Pueblos Indígenas. Informe. Bogotá: Colombia. Recuperado de <https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-territorial/Paginas/pueblos-indigenas.aspx>
- Goddard, G. (2001). Etnias. Revista Marina, 1(16). Recuperado de <https://revistamarina.cl/revistas/2001/2/Etnias.pdf>
- Echeverri, D., & Díaz, S. (2016). Minería aurífera ilegal en el resguardo indígena alto Andágueda. Novum Jus: Revista Especializada En Sociología Jurídica Y Política, 10(1), 135-149. Recuperado de https://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/Juridica/article/view/1179/1166
- Ferreira, R. A. (2015). Los pueblos indígenas de Colombia y su Inmersión en el proceso censal. Revista de la Información Básica, 20(26). Recuperado de https://sitios.dane.gov.co/revista_ib/html_r1/articulo8_r1.htm
- Guerrero, A., & Rubio, J. (2015). Teoría del estado I. El estado y sus instituciones (3 ed.). Madrid, España: Editorial UNED.
- Guzmán, E. C. (2008). Etnoeducación y políticas educativas en Colombia: la fragmentación de los derechos. Revista Educación y Pedagogía, 20(52), 15-26. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3074529>
- Herrán, O. A. (2009). Las minorías étnicas colombianas en la constitución política de 1991. Prolegómenos. Derechos y Valores, 189 - 212. Recuperado de <https://www.redalyc.org/html/876/87617269013/>
- Lamus Canavate, D. (2012). Raza y etnia, sexo y género: El significado de la diferencia y el poder. Revista Reflexión Política, 1-18. Recuperado de <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11023066006>
- Llano Franco, J. (2016). Pluralismo jurídico, diversidad cultural, identidades, globalización y multiculturalismo: perspectiva desde la ciencia jurídica. Novum Jus: Revista Especializada En Sociología Jurídica Y Política, 10(1), 49-92. Recuperado de

https://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/Juridica/article/view/1176

Manrique, E. S. (2005). Los pueblos indígenas en Colombia, Derechos, Políticas y Desafíos. Informe UNICEF, Oficina de área para Colombia y Venezuela. Bogotá: Colombia. Recuperado de <https://www.unicef.org/colombia/pdf/pueblos-indigenas.pdf>

Martínez, A., & Noguera, L. (2017). Garantía de los derechos constitucionales de los pueblos indígenas en el multinacionalismo y el neoconstitucionalismo. *Novum Jus: Revista Especializada en Sociología Jurídica Y Política*, 11(2), 19-51. Recuperado de https://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/Juridica/article/view/1514/1806

Ministerio de Cultura de Colombia. (2008). Afrocolombianos, población con huellas de africana. Recuperado de <http://www.mincultura.gov.co/areas/poblaciones/comunidades-negras-afrocolombianas-raizales-y-palenteras/Documents/Caracterizaci%C3%B3n%20comunidades%20negras%20y%20afrocolombianas.pdf>

Ossorio, M. (2010). *Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas Y Sociales*. Bogotá: Colombia. Editorial Heliasta.

Ortiz, J. (2013). La identidad cultural de los pueblos indígenas en el marco de la protección de los derechos humanos y los procesos de democratización en Colombia. *Revista Derecho Del Estado*, 30(1). Recuperado de <https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derest/article/view/3524/3535>

Parra, C., & Rodríguez, G. (2005). *Comunidades étnicas en Colombia* (1st ed.). Bogotá: Editorial Universidad del Rosario.

Rodríguez, G. A. (2014). *Breve Reseña De Los Derechos Y De La Legislación Sobre Comunidades Étnicas En Colombia*. Bogotá: Universidad del Rosario.

- Rojas, A., & Valencia, S. (2011). Manual para el Fortalecimiento de Habilidades en el Uso de las TIC - Comunidades: Afrodescendientes, Raizales y Palenqueros/as. Bogotá. Recuperado de https://www.ciudadaniadigital.gov.co/627/articles-12667_recurso_PDF.pdf
- Sartori, G. (2001). La sociedad multiétnica - pluralismo, multiculturalismo y extranjeros. Madrid: España. Grupo Santillana de Ediciones, S. A.
- Stavenhagen, R. (2002). Identidad indígena y multiculturalidad en América Latina. Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades, 4(7). Recuperado de <https://www.redalyc.org/html/282/28240702/>
- Vergel, O. H. (2015). Caracterización de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, para la formulación de políticas del deporte. Bogotá: Universidad Distrital Francisco José De Caldas. Recuperado de <http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/2990/1/HurtadoVergelOscar2015.pdf>

Jurisprudencia

- Corte Constitucional Colombiana. (2010). Sentencia C - 063 de 2010 de febrero 4. M.P Humberto Sierra Porto.
- Corte Constitucional colombiana (2012). Sentencia T - 236 de marzo 22. M.P Humberto Sierra Porto.
- Corte Constitucional Colombiana. (2014). Sentencia T - 425 de julio 2. M.P Andrés Mutis Vanegas.
- Corte Constitucional Colombiana. (2014). Sentencia C - 463 de 2014 de julio 9. M.P María Victoria Calle.